

Carmen Alicia PÉREZ HERNÁNDEZ

## POBREZA URBANA Y DETERIORO ECONOMICO: LA DIFÍCIL TAREA DE SOBREVIVIR

ARTÍCULOS

### RESUMEN

Durante la década de los 80, diversos Estados latinoamericanos implementaron ajustes estructurales económicos de corte neoliberal, los cuales tuvieron efectos desproporcionados en los sectores sociales de menores recursos. Venezuela se suma a los países en reestructuración económica en enero de 1989, cambiando drásticamente el contexto económico vivido por los venezolanos.

Este trabajo explora cómo dicho cambio fue experimentado a nivel de los sectores de menores recursos. Para ello, se definieron varias áreas de impacto a nivel del hogar con base en la experiencia de otros países latinoamericanos: participación en la fuerza de trabajo; disminución en el consumo familiar; incremento en la violencia; e impacto del deterioro de los servicios públicos. Los impactos asociados fueron explorados a través de la aplicación de encuestas y entrevistas a una muestra de hogares de dos barrios de Caracas (Chapellín y La Ceiba) en julio de 1992.

Los resultados del estudio muestran cómo diversas familias intensificaban sus estrategias de supervivencia con el fin de enfrentar la nueva situación, reflejando la no viabilidad de permitir la intensificación de estas estrategias como sustituto de una fuerte política social, y la necesidad ineludible de implementar programas para la reversión de la pobreza, en vez de enfatizar el alivio de la misma.

### DESCRIPTORES:

Pobreza. Política Social. Política de ajuste.

### ABSTRACT

During the 80's several countries throughout Latin America implemented neoliberal Structural Adjustment Programs (SAPs). These programs had a disproportionately negative effect on the poorest sector of their populations. The Venezuelan government implemented a SAP in January, 1989, and this drastically changed the domestic economic context.

This article is about the effect of this change on the poorest sectors of society. In order to do so, several impact areas at the household level were identified after the experience of other Latin American countries: labor market adjustments; cuts in household consumption; increase in violence; and decrease in public services quality. The associated effects on poor households were explored through interviews and questionnaires applied in two slums in Caracas (Chapellín and La Ceiba), in July, 1992.

This field study shows how poor families were intensifying their survival strategies in order to cope with the new situation. The results also show the non-viability of recurring to survival strategies intensification as a substitute for strong public social policies. There is also an imperious necessity for poverty reversal programs, instead of orthodox poverty alleviation policies.

## INTRODUCCION

La década de los 80 ha pasado a ser conocida como "la década perdida" para Latinoamérica. Durante este lapso se manifestó y agudizó el problema de la deuda externa, el cual llevó a la implementación de medidas de ajuste estructural económico en toda la región. A partir de 1982, cuando la crisis de la deuda estalla en México, la proliferación de ajustes de este tipo en toda la región permitió generar un flujo neto de recursos desde Latinoamérica hacia los bancos de los países industrializados, destinado a pagar compromisos asociados a la deuda externa. Por otra parte, la reestructuración fue generalmente acompañada por un estancamiento en el desarrollo y crecimiento económico de los países involucrados, y un sensible aumento de la pobreza.

Hacia finales de los 80 ya era ampliamente reconocido el hecho de que las medidas de ajuste estructural económico tienen un impacto desproporcionado sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. A los más pobres sólo les quedó la opción de sobrevivir precariamente, y reestructurar sus vidas en torno a la necesidad inmediata. Incluso los defensores de la reestructuración económica de corte neoliberal reconocieron que ésta debía estar acompañada por políticas sociales coherentes, que protegieran a los más desvalidos durante la severa transición asociada a las políticas económicas involucradas (World Bank, 1989; Psacharopoulos, 1990).

Dentro de este contexto, y tras varios intentos de ajuste parcial en su economía, Venezuela se incorpora en enero de 1989 a los países sometidos a programas de ajuste estructural económico. Esta incorporación es impulsada por el agotamiento de las reservas internacionales, la caída de los precios del petróleo, y la necesidad de abrir las líneas de crédito internacional obteniendo el visto bueno del FMI. En el caso venezolano, la reestructuración económica fue especialmente dramática, ya que se pasaba repentinamente de un modelo rentista, estatista, populista y proteccionista a un modelo de mercado, donde el Estado se relegaba a un rol de facilitador. Si tal transición exigía un cambio profundo en el comportamiento económico y social

de todos los venezolanos, las exigencias se hicieron extremas en el caso de los sectores de menores recursos, los cuales vieron desaparecer súbitamente mecanismos esenciales para conservar su ya precaria calidad de vida (subsidios, moneda estable, y un salario real con un mínimo poder adquisitivo, entre otros). El aumento de más del 100% en el número de hogares en pobreza extrema durante los primeros meses de 1989 ilustra la severidad de la transición para estos sectores (Fierro de Ascanio *et al.*, 1993).

Este artículo tiene como objetivo mostrar las dimensiones más relevantes de lo que significó el peso del ajuste estructural en ese momento, tal y como fue encajado por los sectores de menores recursos. Igualmente, pretende reflexionar sobre lo que dicho costo representó y representa para Venezuela, como sociedad y como país, y cuestionar la viabilidad de aceptar las consecuencias de un modelo semejante sobre la mayoría de nuestra población.

Los datos aquí expuestos con relación al caso venezolano se basan en un estudio realizado en dos barrios caraqueños, Chapellín y La Ceiba. Ambos son barrios urbanos consolidados,<sup>1</sup> y fueron contactados a través de grupos de base locales. El estudio se concentró en las respuestas a nivel del hogar por ser éstas las más extendidas tanto en Latinoamérica como en Venezuela. Los datos fueron recolectados en julio de 1992, a través de observación directa, conversaciones con vecinos de ambos barrios, y la elaboración de 48 encuestas estructuradas y

1/ Barrios fundados hace más de 20 años. Tienen a gozar de servicios básicos: educación, salud, vialidad, agua, cloacas y electricidad (Camacho y Tarhan, 1991).

16 entrevistas semiestructuradas (24 encuestas y 8 entrevistas en cada barrio). Las preguntas estaban orientadas a explorar cómo se experimentaba cada una de las áreas de impacto previamente definidas. Dichas áreas de impacto (ajuste a nivel del mercado laboral, reestructuración del consumo familiar y de la vida diaria e incremento de la violencia) fueron seleccionadas con base en la experiencia anteriormente vivida por otros países latinoamericanos en situación de ajuste, y resultaron un marco útil de trabajo para el contexto venezolano. Se agregó igualmente la percepción acerca de los servicios públicos tradicionales (salud y educación), por considerarse éste un punto clave a la hora de comprender el impacto de ajustes económicos sobre los sectores que más dependen de este tipo de servicio.

Es necesario hacer notar que si bien éste es un estudio no aleatorio, realizado en una muestra muy pequeña de los barrios de Caracas, los resultados encajan con lo que podría esperarse con base en la experiencia de otros países latinoamericanos y los hallazgos de investigaciones similares, hechas durante el período inmediatamente anterior al intento de ajuste de 1989 (Cariola *et al.*, 1992). Los resultados presentados son válidos para las familias entrevistadas y las comunidades observadas, y no existen razones para pensar que la experiencia de otras comunidades diverja significativamente de lo aquí expuesto.

### **LOS AJUSTES ESTRUCTURALES ECONÓMICOS: EL NUEVO PANAMERICANISMO DE LOS 80**

Tras haber adquirido deudas considerables en condiciones sumamente favorables durante los años 70, los países latinoamericanos se vieron en una posición crítica a principios de la década de los 80. La nueva situación de los países endeudados tuvo su origen en el aumento en los precios del petróleo, el deterioro en los términos de intercambio entre los países industrializados y los países en proceso de industrialización (en perjuicio de estos últimos) y el aumento desproporcionado de la tasa flotante de interés (LIBOR) con base en la cual se habían adquirido las deudas externas nacionales. Es conveniente aclarar que estos dos últimos factores están asociados a la

adopción de políticas económicas restrictivas en los países industrializados, como respuesta doméstica al aumento internacional de los precios del petróleo hacia finales de los años 70 (Singh, 1992).

La coincidencia de las enormes deudas adquiridas hasta el momento, la disminución en las entradas por exportación, y el aumento sostenido de las obligaciones financieras asociadas a la deuda (con base en las nuevas tasas de interés), produjo la crisis. En 1982, México fue el primer país que se declaró incapaz de honrar los compromisos adquiridos con sus acreedores. Para el momento, la sobreexposición de los bancos que habían prestado dinero a los países en desarrollo hacía temer una crisis financiera internacional. Es en este contexto, y en la tónica de garantizar el pago total de la deuda bajo las nuevas condiciones financieras, que el FMI propuso una serie de políticas económicas a ser aplicadas en México para la pronta recuperación de su balanza de pagos, políticas aceptadas e implementadas por el país deudor (George, 1988). A medida que otros países se declaraban incapaces de asumir sus compromisos, se terminó de consolidar un estándar reconocible de política económica, el cual terminó siendo conocido como "paquete económico" o ajuste estructural económico.

Los ajustes de esta naturaleza están destinados a transformar profunda y permanentemente las economías de los deudores, haciéndolas más eficientes y modernas y estabilizando sus balanzas de pago. De acuerdo con Benería (1992), los ajustes estructurales implementados en el área durante la década se concentraron en las siguientes áreas de política económica:

- Devaluación, destinada a elevar la competitividad de las exportaciones nacionales. También tiende a generar aumentos inmediatos de los precios al consumidor, disminuyendo el poder adquisitivo, especialmente de los que ganan salario fijo.
- Cortes drásticos en el gasto público, con el fin de disminuir el déficit fiscal y dar más recursos al pago de la deuda. Esta medida también busca transferir recursos del sector público al sector privado. Una forma común de practicar estos cortes

ha sido la eliminación de subsidios, la disminución de inversiones en bienes de consumo colectivo (Infraestructuras, salud, educación y otros servicios), y bajas salariales a los empleados del Estado.

- Privatización de empresas públicas, como una estrategia más para transferir recursos al sector privado, bajo el supuesto de que sólo la acción de la empresa privada garantizará el uso eficiente de recursos, así como el incremento necesario en la producción para poder afrontar la crisis.
- Apertura económica a la competencia internacional, lo cual implica la apertura a la inversión extranjera en los sectores financiero y productivo, con la consiguiente bancarrota de las empresas previamente protegidas y el aumento en los precios de los artículos previamente subsidiados.
- Transición de una economía de sustitución de importaciones a una orientada hacia la exportación, introduciendo la necesidad de competir en mercados internacionales, incrementar la eficiencia y adoptar adelantos tecnológicos. En el caso de los países en proceso de industrialización, también implica una presión por mantener salarios bajos en relación con el contexto internacional, y el colocar recursos y trabajadores en actividades económicas productivas, asumiendo criterios de flexibilidad laboral.

72

Si bien la aplicación de ajustes estructurales económicos permitió el establecimiento de un flujo permanente de recursos de los países endeudados hacia los países industrializados, por concepto de pago de deuda, también es cierto que el efecto de estas políticas económicas en otras áreas no ha sido necesariamente favorable. Se ha argumentado que el impacto de la aplicación sostenida de estas políticas a nivel nacional puede ser devastador, al punto de ser comparado con los efectos de una larga guerra, dada la obsolescencia de la infraestructura, debida a la falta de mantenimiento y actualización por parte de un gobierno que debe destinar gran parte de sus recursos al pago de la deuda; el cese de inversiones en áreas de desarrollo e investigación, debido a la escasez de recursos y la falta de

confianza; y el acentuado descenso de la demanda interna, debido a la baja general del poder adquisitivo (Urquidi, 1991).

Una de las críticas más importantes que han recibido los ajustes estructurales ha sido su efecto devastador sobre los sectores más vulnerables de la población. Estos pagan un costo desproporcionado dentro del contexto del ajuste. La eliminación de subsidios, liberalización de precios y devaluación de la moneda con la consiguiente disminución de los ingresos reales han tenido un fuerte impacto negativo sobre las condiciones de vida de los más pobres, especialmente en aquellos países donde medidas semejantes han sido tomadas sin un fuerte programa social paralelo (Cornia *et al.*, 1988; González de la Rocha, 1991; García *et al.*, 1989; Benería, 1992). Se ha argumentado que los países que implementan estas políticas económicas corren el riesgo de acumular costos sociales irreversibles a través del deterioro de sus recursos humanos (Elson, 1992). Paralelamente, la necesidad de dedicar gran cantidad de los recursos nacionales al pago de la deuda, limita significativamente los recursos disponibles para invertir en el ámbito nacional, sumiendo a los gobiernos en el dilema de invertir recursos limitados en el alivio de los costos sociales o en programas de desarrollo (Kieper, 1983; Urquidi, 1991).

Un aspecto esencial para analizar el impacto de los ajustes estructurales sobre los sectores de menores recursos es el referente a la disminución de la inversión en servicios públicos y bienes de consumo colectivo, tales como infraestructura, salud y educación. A partir de la divulgación del estudio pionero encabezado por Giovanni Cornia (1988), se ha aceptado ampliamente que los cortes en la inversión en servicios públicos han afectado desproporcionadamente a los sectores más pobres de la población (Psacharopoulos, 1990; Elson, 1992). Estos son especialmente vulnerables a la falta de dichos servicios, ya que no pueden escoger entre servicios públicos y privados. En varios países, las familias han tenido que renunciar a servicios previamente dados por el Estado, o producirlos en la casa. Un ejemplo de ello es el caso de los pacientes dados de alta de los hospitales antes de su completa recuperación. Esto se hace en pro de la eficiencia, pero el resultado es que la familia debe

invertir tiempo y recursos en el cuidado del enfermo (en caso de poder asumir su cuidado). De esta manera, el Estado ahorra a expensas de los recursos de las familias que dependen del servicio de salud pública, y se produce una transferencia de costos; costos que antes eran asumidos socialmente ahora deben ser asumidos individualmente (Elson, 1992).

Finalmente, los ajustes han tenido un impacto especial sobre las mujeres de los sectores más pobres, ya que ante las condiciones creadas por la transición económica, la mujer se ha visto forzada a incorporarse al sector laboral con frecuencia en condiciones desventajosas, e intensificar su trabajo en el hogar, para compensar por las nuevas carencias asociadas a la reestructuración (Elson, 1992; Benería, 1991).

Ante este escenario, aun los defensores de los programas de reestructuración económica han aceptado el hecho de que éstos deben estar acompañados por fuertes programas sociales, los cuales protegerán a los más vulnerables durante la penosa transición hacia una economía más sana. Sin embargo, existen divergencias en cuanto al tipo de programa social adecuado para afrontar una situación semejante, especialmente en contextos donde existe una altísima proporción de hogares pobres, necesitados de servicios y subsidios que el Estado no puede proporcionar en su nuevo rol de facilitador empobrecido. Vuelve, entonces, el dilema de la inversión en políticas de alivio para los más afectados o políticas de desarrollo para revertir la creciente pobreza,

mientras se mantienen los compromisos adquiridos en torno al pago de la deuda externa.

### **ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA: LA POBREZA EN EL MARCO DEL AJUSTE ESTRUCTURAL**

Dentro del contexto generado por un ajuste estructural económico, las opciones abiertas a los sectores menos favorecidos para acceder a condiciones de vida aceptables son bastante limitadas.

Tradicionalmente, los sectores de menores recursos han recurrido a las estrategias de supervivencia para aliviar su situación. Estas conllevan un proceso a través del cual los individuos "...toman decisiones, generan oportunidades y reorganizan los recursos existentes, entre ellos el trabajo, para satisfacer los requerimientos de subsistencia de la familia".<sup>2</sup> (Feldman, 1992). Este proceso implica la reasignación de los recursos de la familia entre diversas opciones económicas y sociales. Las familias deben destinar tiempo y esfuerzo a las opciones que mejor responderán a sus necesidades. También pueden darse conflictos entre los miembros de la familia con el fin de decidir cómo se invertirán los recursos comunes (Benería, 1992).

En general, dentro del contexto de los ajustes estructurales latinoamericanos, las familias pobres han tendido a intensificar estrategias de supervivencia ya existentes, enfatizando la generación de ingresos por vía informal (González de la Rocha,

2/ Traducción de la autora.

1991). Igualmente, las respuestas han tendido a concentrarse ampliamente en el ámbito doméstico, tal como ha pasado en México, Jamaica y la República Dominicana (Benería, 1993; González de la Rocha, 1991), aunque también se han dado importantes respuestas a nivel colectivo, como las que se han registrado en Bolivia y Perú (Lind, 1990; Barrig, 1989).

A efectos de este estudio, nos concentraremos en las respuestas más extendidas, a nivel de hogar. La literatura revisada en torno al tema, señala que dichas respuestas se han concentrado en tres áreas principales:

1. **Ajustes a nivel del mercado laboral.** Existe evidencia de que una estrategia de supervivencia importante en casos de ajuste estructural ha sido la incorporación de más miembros de la familia a la fuerza de trabajo. Las mujeres tienden a conformar la mayor proporción de los nuevos trabajadores, incluso de acuerdo con estadísticas oficiales, las cuales tienden a subestimar la participación femenina al no contar sus actividades en los niveles informales de subsistencia (Benería, 1991; Elson, 1992; Hakkert y Goza, 1989). Como Hakkert y Goza (1989) indican:

*El salario real de los trabajadores latinoamericanos ha sido reducido considerablemente desde la implementación de políticas de austeridad... el resultado de esto es el aumento de las personas viviendo en estado de pobreza. El salario legal en varios países no podría sostener a una persona, y menos una familia... para compensar los bajos salarios, los trabajadores han sido forzados a trabajar más horas, encontrar otros empleos, y hallar empleo para sus esposas e hijos (Hakkert y Goza, 1989; p. 76. Traducción nuestra).*

2. **Ajustes a nivel de presupuesto, o reestructuración y disminución del consumo familiar.** Otra estrategia ampliamente documentada ha sido la disminución del consumo, involucrando desde artículos de lujo hasta artículos de primera necesidad (comida, medicinas y otros), especialmente en el caso de familias pobres (Marshall, 1989; Benería, 1992):

*Las familias se han visto forzadas a cambiar sus hábitos de consumo. A principios de los 80 en Chile, más de 60% de las familias urbanas ganaba menos del dinero requerido para pagar una canasta básica... en Costa Rica, los incrementos en la tasa de pobreza entre 1979 y 1982 llevaron a una disminución documentada en el consumo de leche y carne. El consumo por cabeza de carne en Brasil bajó de 22 Kg al año en 1977 a 15 en 1985 y 13 en 1987. Finalmente, aunque no hay datos cuantitativos disponibles, hay reportes sistemáticos en la prensa brasileña sobre familias obreras que han tenido que abandonar sus viviendas regulares para vivir en las favelas (Hakkert y Goza, 1989; p. 76. Traducción nuestra).*

3. **Reestructuración de la vida diaria, incluyendo la intensificación de las labores domésticas.** Los cortes en servicios públicos exigen la producción a nivel del hogar; la baja en el nivel adquisitivo demanda la compra de menor cantidad de bienes; y los hábitos de compra de alimentos cambian en la medida que los compradores deben dedicar tiempo y esfuerzo a encontrar precios accesibles. Las oportunidades de interacción social también disminuyen, debido tanto a restricciones de tiempo como a la falta de recursos para compartir.

4. **Incremento en la violencia.** Aun cuando no está comprobado que los ajustes estructurales generan violencia, algunos investigadores argumentan que existe una relación entre los mismos y el aumento de ésta. Efectos específicos de los ajustes, tales como el aumento del desempleo y la pobreza extrema, la erosión del poder adquisitivo, la pérdida de legitimidad de las instituciones tradicionales y el aumento de la represión para mantener a raya a los sectores más afectados, pueden actuar desencadenando violencia, ya sea en forma de violencia política, asesinatos o robos. Al respecto, Hakkert y Goza (1989) señalan que:

*El incremento sostenido de los homicidios anuales en Latinoamérica es preocupante... Su relación con la austeridad es tenue, excepto en países como Perú, donde la violencia*

*política se desencadenó a raíz de la crisis de la deuda... en Costa Rica, sin embargo, el número de homicidios disminuyó entre 1982-1983 y 1980-1981, aun cuando el número de convictos por robo aumentó en un 70% (Hakkert y Goza, 1989; p. 82. Traducción nuestra).*

Los puntos aquí expuestos han servido de marco contextual para plantear el estudio sobre el impacto del intento de reestructuración económica de 1989 sobre una muestra de hogares de escasos recursos en Caracas, Venezuela. Ciertamente, la intensificación de estrategias como las antes descritas no parece ser un modelo viable de transición social y económica, como quedará en evidencia a través de la presentación del caso estudiado.

### **LA EXPERIENCIA VENEZOLANA: LA VIVENCIA DEL AJUSTE ESTRUCTURAL A NIVEL DE LOS HOGARES MAS AFECTADOS**

El deterioro económico que ha experimentado Venezuela desde principios de los 80 ha estado fuertemente asociado a la caída internacional de los precios del petróleo y a las crecientes obligaciones generadas por el pago de la deuda externa. Dicho deterioro continuó acumulándose hasta 1989, cuando ante el agotamiento de sus reservas internacionales, el peso creciente de su deuda, y la necesidad de mantener relaciones armoniosas con sus acreedores para mantener abiertas sus líneas de crédito internacional, Venezuela decidió acudir al FMI y someterse a un programa de ajuste estructural económico.

Es importante destacar que el intento de ajuste estructural tenía implicaciones profundas en aspectos no económicos del país. La reestructuración económica implicaba el abandono de un modelo de desarrollo ya agotado, edificado en su momento sobre una aparentemente ilimitada renta petrolera. El modelo tradicional daba un rol central al Estado como principal inversionista y órgano redistribuidor de la renta petrolera. De hecho, la transferencia de recursos a los diversos sectores sociales era eje de una "paz social" donde el conflicto social era definido en términos redistributivos, más que político-ideológico-

cos (Alvarez, 1991). El Estado venezolano se convirtió en protagonista de una economía controlada y proteccionista, estableciendo políticas de control de precios y salarios, generación de empleo, e inversión en capital humano, principalmente en las áreas de salud y educación. Eventualmente, su rol central degeneró en relaciones paternalistas con trabajadores e industrias, basadas fuertemente en el subsidio generalizado e indirecto, y en los intereses políticos del partido en el poder.

En contraste, el nuevo modelo exigía el recorte del Estado y enfatizaba el logro de la eficiencia económica como objetivo, relegando los aspectos redistributivos a un plano secundario. En el nuevo modelo, el Estado asumiría un papel de "facilitador", eliminando subsidios y controles de precios, y abandonando sus antiguos roles de inversionista principal, redistribuidor de la renta nacional y generador de empleo. Ahora estos roles serían transferidos al sector privado, quedando la distribución de recursos principalmente en manos del mercado: 1989 fue un año de liberación de precios, eliminación de subsidios y fuerte devaluación del bolívar, llevado de un cambio diferencial a un cambio único y flotante con respecto al dólar. Una de las consecuencias de estas políticas fue una fuerte inflación, cuyo efecto se hizo aún más severo debido a la disminución paralela de los salarios reales (Ver cuadro 1).

Simultáneamente, se intentó reducir el gasto público para aliviar el déficit fiscal y atender a los fuertes compromisos nacidos del pago de la deuda, los cuales consumían una proporción apreciable del Producto Territorial Bruto nacional (generalmente mayor que nuestro gasto público en educación, por ejemplo, ver cuadro 2). Una de las consecuencias de los crecientes compromisos para el pago de la deuda, seguidos por la implementación de políticas de austeridad, ha sido la menor disponibilidad de fondos para invertir en el mantenimiento, actualización y reestructuración de los bienes de consumo colectivo. De hecho, de no haber un aumento y reestructuración de la inversión en los mismos, se corre el riesgo real de disminuir su cobertura y calidad.

**CUADRO 1****VENEZUELA.  
INDICADORES  
ECONOMICOS  
SELECCIONADOS**

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Cambio (Bs/\$)	7.5	8.1	14.5	14.5	34.7	46.9	56.8	68.5
Devaluación (%)		-8	79	-	139	35	21.3	20.5
Inflación (precios al cons. %)	11.4	11.6	28.1	29.5	84.5	40.7	34.2	31.4
Crecimiento del salario urbano (%)	-9.9	1.4	-12.9	-11.3	-26.7	-4.6		
Crecimiento del salario rural (%)			20.2	-17.7	-38.7	-23.4		

Fuentes:

EIU Country Reports, 1981 a 1993. CEPAL, *Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean*, 1992.**CUADRO 2****SERVICIO DE LA DEUDA  
Vs. GASTO PUBLICO EN  
EDUCACION**

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Servicio de la deuda (%PTB)	35.1	61.6	47.2	43.7	24.5	23.2	18.7	
Crecimiento real del PTB	1.3	6.5	3.6	6.2	-7.8	6.9	10.4	7.3
Gasto público en educación (% PTB)	4.7	4.3	4.0	3.8	3.3	2.5	4.5	
Gasto real en educación (billones, Bs. de 1984)*	20.8	19.3	18.6	18.7	14.6	11.8	23.8	

Fuentes:

EIU Country Reports, 1981 a 1993.

CEPAL, *Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean*, 1992.CEPAL, *Economic Survey of Latin America and the Caribbean*, 1990.

\* El presupuesto para educación fue obtenido de las fuentes anteriormente mencionadas, y transformado en bolívares de 1984 usando el factor aplicado por CEPAL en la fuente citada. El aumento del gasto público es 1991 está asociado a la implementación de programas de transferencia directa a los hogares más pobres a través de las escuelas públicas.



Es importante destacar que la estructura del gasto en servicios del Estado venezolano ha tendido a discriminar la inversión en la implementación, mantenimiento y operación de los servicios, en favor del gasto en personal, asociado al tradicional rol del Estado como generador de empleo. Se ha argumentado que en el caso venezolano, hay servicios para los cuales más que un aumento en la inversión, urge una reestructuración del gasto (Cartaya y D'Elía, 1991; Cariola, 1991). Este es el caso para los servicios de educación y salud. En contraste, las áreas de infraestructura requieren ciertamente un aumento de la inversión pública para poder atender a las necesidades de la creciente población. Un ejemplo ilustrativo es el de la vialidad venezolana, cuyo deterioro, se calcula, causaba pérdidas anuales de 50 billones de bolívares en 1991. Algunos de los problemas estaban asociados con el cierre de vías, deslizamientos, puentes caídos y cortes drásticos en el presupuesto de mantenimiento, casi inexistente en 1989 (Fisher, 1991).

### **Ajuste y pobreza: un impacto apreciable**

En el caso venezolano, las medidas de ajuste estructural económico se produjeron en un contexto en el cual los indicadores de pobreza tendían a aumentar, tendencia que se dio durante los 80, paralelamente con la evolución de la crisis de la deuda y la caída de los precios del petróleo (Cartaya y D'Elía, 1991). El ajuste se daba dentro de un contexto particularmente adverso a los sectores de menores recursos, los cuales ya estaban en proceso de reestructurar sus estrategias de supervivencia. La intensificación de estrategias tales como la incorporación de nuevos miembros de la familia al mercado laboral, la intensificación de las jornadas laborales y la disminución del consumo familiar ya había sido identificada en Venezuela como una respuesta al deterioro de las condiciones económicas ocurrido durante los años 80 (Cariola *et al.*, 1992).

Sumándose a esta situación, la liberación de precios, los cortes de subsidios y la unificación del cambio diferencial del dólar a principios de 1989 tuvieron un impacto extremo en los sectores menos favorecidos económicamente. Durante los primeros tres

meses de 1989, se registró un incremento oficial del número de hogares en condiciones de pobreza extrema. Este aumentó de 493.000 a 1.005.000 hogares. Se trata de 512.000 hogares que en el lapso de tres meses se vieron afectados al punto de perder su capacidad de financiar alimentación mínima para sus miembros (Fierro de Ascanio *et al.*, 1993). También en ese período, y específicamente el día 27 de febrero de 1989, ocurrió el estallido social más severo que había visto hasta el momento el presente período democrático.

Dentro de este contexto, el Estado venezolano implementa una serie de políticas sociales con un enfoque completamente diferente al tradicional. Se pretende sustituir el subsidio generalizado por subsidios y programas altamente focalizados. El área que recibió mayor prioridad y recursos fue la de los subsidios directos focalizados en los hogares más pobres, acentuando así el carácter compensatorio de la política implementada. Estos subsidios fueron principalmente canalizados a través de las escuelas, viéndose su impacto limitado por la deserción escolar y la no incorporación de niños al sistema educativo (Cariola, 1991).

Se ha argumentado que el énfasis puesto en políticas compensatorias no es efectivo en términos de detener el avance de la pobreza. Igualmente, es sumamente difícil mantener transferencias directas de recursos cuando la población necesitada sobrepasa el 60% del total (Cariola, 1991). Los datos recopilados durante el estudio llevan a inferir que la intervención estatal no ha sido suficiente para frenar algunas de las tendencias más preocupantes y nocivas generadas por la situación de ajuste. Más bien, se pone en evidencia la necesidad urgente de estrategias que no sólo alivien, sino que contrarresten la pobreza.

### **Ajuste y supervivencia: Chapellín y La Ceiba**

Chapellín y La Ceiba son asentamientos informales de morfología irregular, los cuales comparten un problema común de escasez de áreas abiertas. Como barrios consolidados, ambos tienen acceso a servicios de educación, salud (módulos

asistenciales), electricidad, agua,<sup>3</sup> cloacas y recolección de basura.<sup>4</sup> Sus calles principales están pavimentadas, y las caminerías principales están bien definidas.

Chapellín ocupa unas 11 hectáreas en el este de Caracas, dentro del Distrito Federal, Municipio Libertador, Parroquia El Recreo. De acuerdo con el Censo de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela,<sup>5</sup> en 1990 Chapellín contaba con 3.557 habitantes. El barrio está rodeado por urbanizaciones de clase media y media alta (Avila al norte, La Campiña al sur, Country Club al este y la Florida al oeste). Los servicios se concentran hacia el área central, en la Calle Real, y en las zonas periféricas del barrio. La comunidad ha sido objeto de varios programas de apoyo por parte del Estado y de ONG's. Entre ellos han habido programas de consolidación,<sup>6</sup> programas de entrenamiento y multihogares. La comunidad tiene acceso a dos escuelas privadas sin fines de lucro (Centro Don Bosco y Colegio Franciscano), las cuales ofrecen servicios médicos a la comunidad.

La Ceiba ocupa unas 6 hectáreas dentro de un asentamiento mayor (San Agustín del Sur). Pertenece al Distrito Federal, Municipio Libertador, Parroquia San Agustín. No hay estadísticas recientes de la población de la Ceiba. Cifras oficiales indican una población de 3.640 habitantes para enero de 1978.<sup>7</sup> El asentamiento está rodeado por otros barrios (Marín al este y El Manguito al oeste), una urbanización de clase media (Terrazas de las Acacias al sur) y un asentamiento planificado para

familias de bajos recursos (la parte urbanizada de San Agustín al norte). En el caso de La Ceiba, la división parte alta-parte baja estaba reforzada por los frecuentes tiroteos entre pandillas juveniles. Con frecuencia, los vecinos de la parte baja no se atrevían a subir, y viceversa. Debido a esto los vecinos de la parte alta estaban más restringidos en su acceso a servicios, ya que para llegar a la mayoría de los mismos deben atravesar la parte baja del asentamiento. Los vecinos de La Ceiba dependen en su mayoría de los servicios públicos de educación (La Escuela Don Pedro, de Fe y Alegría, es una importante excepción. Esta escuela sirve a la parte alta de San Agustín, incluyendo a la parte alta de La Ceiba).

#### *Perfil económico y demográfico de la muestra<sup>8</sup>*

Las familias encuestadas presentan un perfil demográfico asociable al de la pobreza urbana. El promedio de miembros de la familia en ambas muestras (5.7) se acerca a la media nacional para pobreza urbana moderada (5.6). El número de miembros menores de 15 años por familia en los grupos encuestados en Chapellín (1.7), se acercan a la media nacional para hogares no pobres urbanos (1.2) mientras que en La Ceiba (1.9) se acerca a la media de pobreza urbana moderada (2.4). Finalmente, ambas muestras exceden a la media nacional en lo referente a mujeres cabeza de familia en hogares de extrema pobreza (Chapellín: 25%, La Ceiba: 33%, Venezuela, 24.3%). La deserción escolar era común en ambas comunidades: tanto en Chapellín como en La Ceiba, menos del 15% de los miembros de las familias

3/ El servicio de agua en Caracas ha sido insuficiente por años. En el momento en cual el estudio fue hecho, el servicio era particularmente precario, y el agua podía faltar por días.

4/ En el caso de La Ceiba, las cloacas habían colapsado en varios puntos. La recolección de basura era insuficiente, y los basureros abiertos eran comunes en los espacios públicos.

5/ UCV, Escuela de Trabajo Social, Censo del Barrio Chapellín, 1990.

6/ De acuerdo con los vecinos, el más reciente había ocurrido en diciembre de 1992.

7/ FUNDACOMUN, *Inventario Nacional de Barrios*, Caracas, 1979.

8/ Los indicadores nacionales de pobreza urbana en Venezuela (para el año 1989) fueron tomados de Cartaya y D'Elia, 1991.

encuestadas había terminado bachillerato, y ninguno había terminado estudios superiores. Estos bajos niveles educativos afectan la capacidad de inserción en la fuerza de trabajo, especialmente para los trabajadores más jóvenes y con escasa experiencia.

Para ambas muestras, la población económicamente activa por familia es superior a la media nacional para hogares urbanos no pobres (Chapellín: 2.4, La Ceiba: 2.4, Venezuela:1.6). A pesar de este indicador, las familias encuestadas no reciben altos ingresos, debido tanto a la erosión en los salarios reales ocurrida en la década de los 80 y acentuada por las medidas económicas adoptadas en 1989, como a la inserción de los trabajadores en el mercado de trabajo, concentrándose en trabajos mal pagados. Aproximadamente una tercera parte de los trabajadores de ambas muestras ganaba el salario mínimo legal o menos (especialmente en caso de trabajar en el sector informal). Este indicador se acentúa para el caso de las mujeres trabajadoras, la mitad de las cuales ganaba el salario mínimo o menos. En todos los casos, las mujeres estaban sobrerrepresentadas en las filas del subempleo.<sup>9</sup>

### **Estrategias de supervivencia a nivel del hogar: sobreviviendo al ajuste**

#### *Participación en la fuerza de trabajo*

Como era de esperarse, las familias entrevistadas estaban en proceso de intensificar aún más su participación en el mercado

9/ Empleos pagados por debajo del salario mínimo.

laboral. La incorporación de nuevos miembros de la familia al mercado de trabajo, sin compensar necesariamente por la caída de los salarios reales, trae como consecuencia la reestructuración del núcleo familiar, donde los roles tradicionales no pueden ser satisfechos a cabalidad. Un ejemplo de ello es el caso de las madres, quienes ven frustrada su legítima aspiración a educar a sus hijos y darles un mínimo soporte en lo material.

Aproximadamente un tercio (30.2%) de la población empleada de la muestra tomada en La Ceiba se había incorporado al mercado de trabajo entre 1989 y 1992.<sup>10</sup> Este indicador señala un incremento sensible del número de miembros trabajadores por familia durante los primeros años del ajuste económico. Dado que esta incorporación al mercado de trabajo ocurrió en una época de recesión, el sector formal no tuvo la capacidad de absorber las nuevas incorporaciones a la fuerza de trabajo, por lo cual el sector informal absorbió aproximadamente a un tercio de los nuevos trabajadores.

Es importante hacer notar que todas las nuevas trabajadoras mujeres se incorporaron al sector informal, concentrándose los hombres en empleos ofrecidos por el sector formal de la economía. Esto ilustra el hecho de que el acceso de la mujer de menores recursos al mercado de trabajo está severamente restringido, debido tanto a su bajo nivel de instrucción como a su carga de trabajo doméstico. Las responsabilidades en el área de reproducción y mantenimiento doméstico no permiten que la mujer compita en igualdad de condiciones con respecto al

10/ Específicamente para este indicador sólo existen datos para la muestra tomada en el barrio La Ceiba.

hombre en el mercado de trabajo. Debido a su situación particular (discriminación para trabajos específicos, obligaciones domésticas y escasez de tiempo), la mujer tiende a incorporarse al mercado de trabajo en condiciones desventajosas. De hecho, las mujeres encuestadas tendían a preferir trabajos en su casa o cerca de la misma, en busca de flexibilidad para atender a sus labores domésticas, ya intensificadas por la crisis. La mayoría de estos trabajos produce muy bajos ingresos, o ninguno, en el caso de mujeres trabajando para sus compañeros o familiares. Dado que la mujer tiende a concentrarse en trabajos peor pagados en el sector informal, existe una distribución desigual de ingresos asociada al sexo. Esta distribución de ingresos por sexo afecta a la familia, ya que de acuerdo a entrevistas y observación directa, en general las mujeres tienden a invertir sus ingresos en las necesidades de la familia, mientras que los hombres tienden más a guardar parte de los mismos para su consumo personal.

Para el momento de la encuesta, un 37,5% de la muestra de Chapellín y un 50% de la de La Ceiba complementaba sus ingresos a través de trabajo en el hogar.<sup>11</sup> La mayoría de estas actividades son desempeñadas por mujeres, intensificando su trabajo doméstico. En ambas comunidades, aproximadamente la mitad de estas actividades aparecieron durante el año 1991/1992. Todos los nuevos trabajadores, excepto uno, eran mujeres.<sup>12</sup> En algunos casos, cuando la cabeza femenina del hogar debía salir a trabajar, alguna hija debía asumir sus obligaciones domésticas.<sup>13</sup> De hecho, es común que los

hermanos mayores velen por los menores, mientras la madre trabaja. Un efecto preocupante de la intensificación extrema de la participación en el mercado laboral es la pérdida de controles sociales (ejercidos por la comunidad, la familia directa y especialmente la madre) sobre los niños, quienes con frecuencia permanecen solos por largos períodos de tiempo, mientras los adultos deben dedicarse a garantizar una supervivencia frecuentemente precaria. La formación del individuo queda así forzosamente desatendida, justamente cuando más es requerida por el niño.

La situación económica también hizo más severas las condiciones para la reinserción en el mercado laboral, en caso de pérdida de empleo. Aproximadamente la cuarta parte de la población económicamente activa de ambas muestras había perdido algún empleo durante el período 1989/1992 (Chapellín 24,6%, La Ceiba 26,3%). Entre las causas de pérdida de empleo, destaca la pérdida irrecuperable de medios de producción (tales como el robo de taxis o motocicletas), con lo cual el individuo pierde su fuente principal (y a veces única) de ingresos, quedando en condiciones sumamente precarias. En ciertos casos, la pérdida del trabajo está relacionada con vulnerabilidades específicas de la población encuestada, como el caso de la madre despedida por cuatro días de ausencia a su trabajo, durante los cuales se dedicó a buscar a su hijo secuestrado por la recluta.

Las entrevistas arrojan datos cualitativos que complementan la información hasta ahora presentada. Se hace evidente una

11/ Actividades informales desarrolladas en el hogar para generar ingresos extra. Esta categoría se evaluó por separado de la participación en la fuerza de trabajo. De hecho, se encontraron algunos casos en los cuales la misma persona trabajaba dentro y fuera de la casa.

12/ Los nuevos trabajos en la casa no difieren de los más antiguos. Los trabajos identificados fueron: cuidado de niños, lavado de ropa, elaboración de artesanías, trabajos de costura, preparación de alimentos para vender, dictado de clases en casa. De éstos, los cuatro últimos se reprodujeron durante el año 1991/1992.

13/ En un caso, una madre trabajadora pidió a su hija mayor que abandonara sus estudios para cuidar a sus hermanos durante su ausencia. Meses después, la misma madre pidió a su hija que también consiguiera empleo para complementar los magros ingresos de la familia.

percibida reducción de oportunidades de empleo permanente. Los vecinos identificaron varias causas de este fenómeno:

- Baja en el poder adquisitivo, la cual impide comprar materiales para producir o vender, o sustituir medios de producción perdidos.
- Aumento de los costos de entrenamiento y educación, cerrando oportunidades de estudiar a tiempo completo para individuos en edad de trabajar.
- Incremento en los costos del transporte público, el cual disminuye la distancia máxima aceptable para ir a un trabajo.
- Creciente violencia y criminalidad, especialmente en La Ceiba. De hecho, algunos entrevistados habían cambiado sus horarios de trabajo con el fin de llegar a sus casas a un horario percibido como más seguro. Algunos incluso habían dejado sus trabajos debido a que debían llegar a sus barrios de noche, o a que sus trabajos los exponían a la delincuencia.
- Discriminación contra los habitantes de los barrios. Los empleadores en el sector formal tienden a pedir requisitos tales como buena presencia (apariencia y maneras de clase media, preferiblemente de tez clara) que los vecinos del barrio no tienden a presentar. De acuerdo con los entrevistados, la discriminación puede ocurrir incluso a través de las planillas para solicitar el empleo, cuando no hay contacto directo con el empleador. Algunos entrevistados mencionaron que habían optado por mentir sistemáticamente sobre su dirección de habitación con el fin de emplearse en el sector formal.

Es notorio que las cuatro primeras causas identificadas por los afectados eran tendencias íntimamente asociadas con la transición económica y social que estaba viviendo el país en ese momento. Incluso ahora estas tendencias continúan, y no es de esperarse que se detengan en el corto o mediano plazo. A menos que la situación cambie, las estrategias laborales de los sectores afectados deberán seguir intensificándose.

Finalmente, existe un importante factor estructural que trabaja en perjuicio de la inserción laboral de los sectores de menores recursos. Se trata del limitado acceso de estos sectores a las fuentes de información sobre oportunidades de empleo en el sector formal. Este punto se hizo evidente a través de las entrevistas y conversaciones con los vecinos del barrio. En el barrio se recurre con frecuencia a la búsqueda de trabajo a través del mecanismo de rumores, donde las oportunidades de empleo son transmitidas vía oral por amigos y conocidos. Sin embargo, es importante destacar el limitado contacto personal de los habitantes del barrio con posibles empleadores en el sector formal de la economía, especialmente tratándose de empleos bien remunerados.

Es así como los vecinos del barrio compiten en desventaja con los miembros de otros estratos sociales, quienes tienen acceso a una mejor preparación y a fuentes de información alternas, tales como contactos personales con potenciales empleadores y/o círculos de amigos y familiares que facilitan este tipo de contacto. Sin embargo, a medida que el barrio se desvincule de las pocas fuentes de información sobre empleo formal con las cuales aún mantiene contacto (tales como el periódico, abandonado por muchos entrevistados y encuestados debido a la reducción de gastos en el seno familiar), se limiten aún más las posibilidades de inserción laboral ventajosa de sus habitantes.

#### *Consumo familiar y reestructuración de la vida diaria*

Tal como se esperaba, se encontró que la drástica disminución del consumo, incluso en artículos esenciales, era una estrategia común entre los grupos familiares estudiados. Se encontraron grupos en los cuales el cabeza de familia tenía una dieta diferente a la del resto de la familia (consumía carne, por ejemplo). Igualmente se identificaron estrategias de sustitución que, de convertirse en tendencias, podrían llevar a una generación de niños desnutridos e impedidos en sus potenciales físicos y mentales.

La mayoría de las familias encuestadas había cambiado sus hábitos alimenticios (Chapellín 80%, La Ceiba 70%), reestruc-

turando el consumo familiar con base en diferentes estrategias. Como un vecino señaló: "Si desayunas, no almuerzas". El gasto en comida representa una apreciable proporción de los gastos totales de los hogares pobres, por lo cual los cambios en el poder adquisitivo necesariamente afectarán esta área. Si bien no fue el ajuste el que produjo ciertas tendencias, como por ejemplo, la baja en el consumo de proteínas (Gutiérrez, 1992), ciertamente la nueva situación de austeridad acentuó tendencias existentes.

Las principales estrategias identificadas en cuanto a la reestructuración del consumo alimenticio fueron:

1. Sustitución de alimentos. Se refiere a la sustitución de fuentes tradicionales de proteína animal (carne de res y leche principalmente) por otros alimentos, y el incremento asociado en la ingesta de carbohidratos. Más de la mitad de las familias encuestadas en ambos asentamientos había disminuido su consumo de carne, lácteos y pescado. Aproximadamente una tercera parte de las familias había aumentado su consumo de harinas y pastas, y una pequeña porción había recurrido a fuentes alternativas de proteínas, tales como huevos, embutidos, atún y sardinas.
2. Corte en el consumo total de alimentos, sin alterar en lo posible el menú familiar. Aproximadamente la tercera parte de los encuestados en La Ceiba admitieron haber bajado el consumo total de alimentos en la casa, con el fin de mantener el consumo de carne y atender a otras prioridades aparte de la comida.
3. Combinación de las anteriores. Se encontró principalmente en La Ceiba, donde no sólo se sustituyeron los patrones tradicionales de consumo, sino que se disminuyó la ingesta total de comida por familia en aproximadamente un 50% de los casos.

Estos cambios en la dieta familiar parecen estar afectando severamente a los niños, lo cual podría llevar a lesiones irreversibles y a pérdida de ciudadanos que, más que recursos humanos, son personas con el legítimo derecho a desarrollarse integralmente en la medida de sus capacidades. El Colegio Don Pedro, el cual sirve a la parte alta de La Ceiba y de San Agustín en general, guardaba estadísticas de desnutrición entre los niños de preescolar. De los 198 niños inscritos, más de la mitad sufría de algún nivel de desnutrición,<sup>14</sup> situación especialmente preocupante por estar estos niños en una edad crítica. Entrevistas con el personal del colegio indican que las madres tienden a proteger a los niños más pequeños e indefensos, hasta que llegan a la edad de 6 ó 7 años aproximadamente. A partir de este punto, la madre se concentra en atender sus otras actividades de supervivencia, y la alimentación y cuidado de los niños pueden verse afectados.

Para comparar el consumo de alimentos con el consumo de otros artículos, se preguntó a los encuestados acerca de su consumo de ropa. Mientras que en Chapellín un 67% de las familias encuestadas consumía menos ropa en 1992 que en 1989, en La Ceiba sólo un 8% había reducido su consumo.

14/ Fuente: Estadísticas de desnutrición a nivel preescolar, Colegio Don Pedro.

Tanto afirmaciones de los entrevistados como observación de campo sugieren que en general las familias que no redujeron su consumo ya tenían un consumo evidentemente bajo de ropa. Es interesante notar que en La Ceiba, la proporción de familias que redujeron su consumo de proteínas es mayor que el de las que redujeron su consumo de ropa. Esto podría sugerir que varias familias ya tenían un consumo mínimo de ropa, por lo cual no estaban en capacidad de reducirlo y debieron reestructurar su consumo de otros artículos, como comida. Si bien esta hipótesis puede aplicar para las familias encuestadas, esto no explica los patrones de consumo de algunas de las familias de los barrios. Tanto en La Ceiba como en Chapellín, ciertas familias restringían sus gastos en áreas que parecen prioritarias para la supervivencia (como la comida), y paralelamente adquirían artículos tales como ropa y alcohol. Varios vecinos hicieron notar este hecho, así como la extendida afición por los zapatos de marca. El presidente de la Junta Parroquial de San Agustín se refirió al problema del alcohol como un problema de salud pública en la parroquia, y tanto líderes locales como vecinos entrevistados indicaron que muchos vecinos habían aumentado su consumo de alcohol en los tres años previos.

Estas prioridades de consumo parecen no concordar con un contexto de crisis. Se asume con frecuencia que los recursos escasos del grupo familiar serán invertidos de acuerdo con las necesidades de supervivencia de la familia en conjunto, pero esta suposición no explica las observaciones descritas. Cabe revisar las premisas anteriores, dado que aparentemente las ropas y el licor parecen ser lo suficientemente importantes como para merecer una proporción considerable de recursos que podrían ser invertidos en la supervivencia de los grupos familiares. Podrían aventurarse algunas hipótesis al respecto:

1. Los gastos familiares no pueden ser comprendidos sin analizar cómo están distribuidos los recursos y el poder de invertirlos dentro del grupo familiar. La familia es un espacio de conflicto en torno a la distribución de recursos escasos, distribuidos según las prioridades de los miembros que los controlan.

2. El estigma de la pobreza es socialmente promovido a través de los medios de comunicación. En una sociedad de consumo, donde un individuo vale tanto como consume (tanto tienes, tanto eres), la pobreza es un yugo humillante. Estos valores se reproducen en el barrio, y una buena apariencia puede estar asociada a un estatus social aceptable, tanto dentro como fuera del barrio.

3. La gente que parece pobre puede ser blanco directo de tratamiento discriminatorio, tanto en su comunidad como fuera de ella. La apariencia personal puede marcar una diferencia en cuanto a la obtención de trabajo, interacción con las autoridades y funcionarios públicos e interacción social en general.

4. En el caso de Chapellín, una observación de varios trabajadores de base, la cual coincide con observaciones de la investigadora, es que la ubicación del barrio entre urbanizaciones de clase media ha influido en las expectativas de consumo de los habitantes del barrio, generando en ellos aspiraciones de consumo similares a las de sus vecinos mejor ubicados socioeconómicamente. Estas se ven crecientemente frustradas con el deterioro del poder adquisitivo de los habitantes del barrio.

En cuanto a la información cualitativa obtenida a través de entrevistas, los entrevistados asociaron los cambios en consumo con el deterioro del poder adquisitivo. Estos cambios en el consumo han sido acompañados por una reestructuración apreciable de la vida cotidiana. Los viajes para compra de alimentos se habían intensificado por falta de recursos, tanto porque la familia podía adquirir menos productos en cada viaje como porque era necesario hacer recorridos mayores para buscar mejores precios. En el caso de las familias que disponían de aparatos electrodomésticos, se observó una tendencia a la no reposición o no reparación de los mismos, en caso de que éstos se dañaran. En general, las familias en esta situación no podían asumir los costos asociados a una reparación o reposición, con lo cual las labores domésticas se han visto intensificadas. El rango de nuevas labores va desde la compra diaria de alimentos, en caso de pérdida de la nevera, hasta el lavado de ropa a mano,

en caso de pérdida de la lavadora. Los vecinos entrevistados indicaron además que las posibilidades de viajar y reunirse socialmente habían disminuido, por falta de recursos para invitar y corresponder invitaciones. En particular, los hombres señalaban tener menos amigos, debido a su menor capacidad para invitar. La disminución de fiestas y otros eventos sociales debido a su costo puede estar afectando negativamente las posibilidades de interacción social en el barrio. Los viajes por motivos familiares también habían disminuido. Los roles familiares han sido redefinidos, tal y como se analizó en el punto sobre la intensificación de la participación en el mercado laboral, y en general, poco tiempo libre queda para los habitantes del barrio, absorbidos por sus diversas tareas de supervivencia.

#### *Incremento de la violencia*

No fue sorprendente encontrar indicadores de violencia creciente en los últimos tiempos. Más del 90% de los encuestados en ambas comunidades coincidió en que la violencia se había incrementado durante los tres años previos al estudio. Pero mientras los vecinos de Chapellín la identificaban con robos pequeños y raterías, los de La Ceiba la asociaban a asesinatos y crimen organizado. En ambas comunidades, la criminalidad se concentra en las actividades de bandas juveniles, las edades de cuyos miembros oscilaban entre los 15 y los 18 años, generalmente. En La Ceiba, los tiroteos entre bandas eran comunes, y no era infrecuente que inocentes fueran alcanzados por balas perdidas. La violencia ha llegado al punto de ser obstáculo para las actividades de Horno de Cal, la asistencia a eventos deportivos organizados por la asociación de vecinos había bajado drásticamente después de que individuos armados dispararon contra el público asistente a una competencia local. Igualmente, las hermanas del Colegio Don Pedro habían tenido que detener un proyecto para formar grupos cristianos de base debido a la creciente inseguridad dentro del barrio, la cual afectaba la disposición de los vecinos a reunirse (especialmente de noche, después de la jornada laboral).

Si bien, como ya se señaló en la presentación inicial, es difícil argumentar que la reestructuración económica ha sido la causa

directa del aumento en la violencia, ciertos efectos de dicha reestructuración pueden estar directamente relacionados con el incremento en la misma. En los casos estudiados, se podrían citar los siguientes puntos:

- Disminución del cuidado y vigilancia maternos, debido a la presión puesta sobre la mujer para que se incorpore al mercado de trabajo y genere ingresos para la supervivencia de la familia.
- Menores oportunidades para la entrada de los jóvenes al mercado de trabajo, tanto por un acceso más restringido a la educación como por la contracción del mercado de trabajo en un contexto de crisis.
- Las condiciones de frustración y desesperanza asociadas al endurecimiento de las condiciones de vida para los sectores más vulnerables. Muchos vecinos aún esperaban que el Estado volviera a asumir su antiguo rol de proveedor, y no entendían la transición que estaban viviendo.

Finalmente, es necesario mencionar la pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas tradicionales percibida por los vecinos en aquel momento, sin ningún sustituto a nivel del barrio. Las organizaciones de base tradicionales, infiltradas por los partidos políticos, tenían una baja credibilidad. Fuera de las organizaciones partidizadas, existía poco poder de organización estructural a nivel de las bases, con lo cual las comunidades quedaban indefensas ante el incremento de la violencia, hecho este agravado por la disminución de oportunidades de interacción social en el barrio.

#### *La presencia social frente a la crisis: percepción de los servicios y del rol del Estado*

En lo tocante a los servicios públicos, es notorio que los hogares encuestados los percibieron como deficientes, e incluso en franca desmejora. Las deficiencias han llegado al punto de llevar a muchas de estas familias a renunciar a servicios esenciales (tal como sucede en el área de salud) por



ser incapaces de asumir el costo de un servicio privado equivalente.

Este panorama es especialmente delicado, debido a que el deterioro del poder adquisitivo de las familias de menores recursos las obliga a depender irremisiblemente de los servicios públicos, siendo ésta una dependencia que tenderá a acentuarse aún más en el futuro.

Se exploraron las percepciones en torno a los servicios públicos de salud y educación, por ser considerados de gran importancia para la supervivencia de los hogares de menores recursos. Como era de esperarse con base en la muestra, la gran mayoría de las familias encuestadas dependía de servicios públicos en el área de salud (92% en Chapellín y 96% en La Ceiba). En contraste, la cercanía de escuelas sin fines de lucro administradas por organizaciones no gubernamentales (ONG's) reducía la demanda del servicio público de educación. Debido a ello, si bien un 88 % de la muestra de Chapellín y un 96% de la de La Ceiba usaban servicios de educación, un porcentaje menor de usuarios dependía de los servicios públicos (67% en Chapellín, 90% en La Ceiba).

Existe en general una percepción negativa del servicio público de salud. Ningún encuestado o entrevistado consideró que había mejorado en los tres años anteriores a la encuesta, varios apuntaron que el servicio era "malo, como siempre" y aproximadamente la mitad de ambas muestras consideró que estaba deteriorándose progresivamente. Algunos entrevistados habían optado por evitar el uso de hospitales, aun si estaban enfermos. En diferentes casos, la compra de medicinas y seguimiento de tratamientos médicos había sido pospuesta por falta de recursos económicos. Entretanto, la familia recurría a la automedicación y los tratamientos caseros. Tocando este punto, un vecino señaló: "nosotros nos curamos solos". Las quejas más frecuentes asociadas al servicio de salud fueron la falta de recursos y medicinas, implicando altos costos para los pacientes (quienes deben pagar por todo), o en su defecto un pésimo servicio. Los entrevistados señalaron problemas de negligencia, largos períodos de espera, falta de ética, ausentismo médico, la

obligación forzosa de visitar las salas de emergencia de varios hospitales antes de ser aceptados en alguna, y del costo de comprar todos los implementos médicos en caso de ser requeridos. Ante esta situación, algunos entrevistados han desarrollado estrategias propias, tales como el uso de influencias para ser atendidos, y discusiones abiertas ("zaperocos") en las salas de emergencia.

De forma similar, ninguno de los usuarios del servicio público de educación en Chapellín y La Ceiba consideró que el servicio había mejorado en los últimos tres años, y aproximadamente la mitad de estos usuarios consideró que el servicio se había deteriorado en ese lapso. Las observaciones sobre el servicio cambiaron de acuerdo con las comunidades. En Chapellín, los entrevistados se quejaron de los malos maestros y de la falta de recursos en las escuelas. En La Ceiba, la principal preocupación giraba en torno a la violencia y la falta de seguridad personal para los niños, aunque también se mencionó el ausentismo de los profesores, la falta de recursos para la enseñanza y la pérdida de clases por huelgas. En ambas comunidades hubo comentarios sobre el poco mantenimiento de los espacios físicos de las escuelas, y el aumento en costos de inscripción y materiales escolares.

Aparte de estas percepciones, los vecinos de ambas comunidades cuestionan los beneficios reales de la educación formal. Esta observación coincide con la tendencia hallada por Cariola (1992) en 1986/87. Al respecto, una entrevistada señaló que sus oportunidades de trabajo no habían cambiado con su diploma de bachillerato: "Terminé bachillerato. ¿Y qué? Los estudios no te abren puertas. Yo he hecho de todo, hasta limpiar pisos". Este cuestionamiento sobre la educación formal es especialmente preocupante, ya que se podría traducir en una tendencia hacia la deserción escolar, reforzando el problema generado por la mayor proporción de personas sin acceso a educación, entrenamiento e información, debido a los costos crecientes de los estudios y a la urgencia de generar ingresos para el grupo familiar.

Es posible que estemos experimentando el fin de la educación como mecanismo de movilización social relativamente accesible para los sectores de menores recursos. Los testimonios indican que el acceso a ciertos empleos está fuertemente restringido para los trabajadores de estos sectores, aun si tienen instrucción (incluyendo a profesionales). Es necesario hacer estudios a profundidad para identificar hasta qué punto la educación "per se" realmente puede abrir puertas de ascenso social a individuos sin acceso a las redes sociales que controlan recursos e información.

Para complementar esta información, es oportuno hacer un comentario sobre el ambiente físico de los barrios. Su superficie está construida en casi su totalidad, quedando las áreas remanentes (después de la implantación de la unidad) como espacios de circulación, a veces bastante escasos. La distribución irregular y no planificada de los barrios impone severos problemas a la hora de dotarlos de servicios y redes de infraestructura. No es de esperarse que los vecinos generarán recursos para mejorar su espacio físico, y el Estado, con sus limitados recursos y su enorme deuda, puede tener baja capacidad de respuesta para mantener y mejorar el entorno físico de los barrios. Entretanto, el deterioro ambiental genera situaciones precarias en el área de salud, especialmente en San Agustín, donde varios casos de cólera habían sido diagnosticados para el momento del estudio. Por otro lado, los crecientes costos de la vivienda junto con el deterioro del poder adquisitivo de los estratos más bajos permite prever una sobredensificación aún más acentuada de los barrios (los cuales ya están hiperdensificados), lo cual incidirá en la insuficiencia de servicios y hacinamiento.

## CONCLUSIONES

Los resultados de esta investigación hacen eco de las experiencias previas de otros países latinoamericanos sometidos a ajustes estructurales. Si las investigaciones del CENDES (Cariola *et al.*, 1992) revelaron la intensificación de

diversas estrategias de supervivencia hacia finales de los ochenta, este trabajo sugiere su intensificación extrema a raíz del intento de reestructuración económica iniciado en 1989.

No es difícil argumentar la no-viabilidad de un modelo que precariza la vida cotidiana de una gran mayoría de la población a los extremos sugeridos por esta investigación. Detrás del término académico "deterioro de recursos humanos" se esconden fortísimas realidades cotidianas: la necesidad de trabajar dos o más turnos diarios para ganar un ingreso precario, al costo de desatender a los miembros más vulnerables del grupo familiar (niños, ancianos, enfermos); la renuncia al consumo de medicinas e incluso de una ingesta regular de alimento; la constante convivencia con la violencia; la reestructuración de la vida diaria en torno a la necesidad inmediata de sobrevivir, con el consiguiente abandono de proyectos a largo plazo, incluyendo la culminación de estudios; todo esto sucediendo ante la creciente carencia de bienes de consumo colectivo, incluso servicios tales como educación y salud.

Cabe preguntarse hasta qué punto es humanamente posible intensificar estrategias como las antes descritas, e incluso, hasta que punto éstas están garantizando la supervivencia de los hogares de menores recursos. Se podría argumentar que como sociedad ya estamos pagando el precio de algunas de las estrategias descritas, el cual cobra la forma de un creciente número de delincuentes juveniles y niños abandonados, carentes de educación y formación. También la capacidad intelectual y la salud de nuestras generaciones jóvenes están seriamente amenazadas por estrategias tales como la disminución extrema del consumo de alimentos. Más que de "recursos humanos deteriorados", se trata de individuos que no llegan a realizarse como seres humanos integrales a pesar de sus potencialidades, porque su medio no sólo no se los permite, sino que lucha contra ellos.

Por otra parte, una política social compensatoria, que busque proteger a los sectores vulnerables a través de la transición hacia una economía pujante, se enfrentará obligatoriamente al problema de la inmensa masa de población necesitada (Cariola,

1991). En estas condiciones, plantearse una transición económica que puede durar décadas, sin dar la adecuada protección a estos sectores, significa condenarlos a conciencia a una vida misera (y probablemente a una muerte temprana). No es casualidad que los ajustes estructurales estén asociados a situaciones de conflicto social y aumento de la represión oficial; difícilmente un grupo humano aceptaría esas condiciones de buena gana.

Parece pertinente una reflexión referente a las metas asociadas a cualquier plan económico nacional. Pareciera ser que en estos momentos, nuestros pobres son tantos que es virtualmente imposible protegerlos en las condiciones extremas generadas por un ajuste ortodoxo. Por otra parte, trabajos como el presentado en este artículo ponen en evidencia el enorme costo que representa para estos sectores el garantizar una precaria supervivencia en un contexto económico adverso. Parece poco realista plantearse el futuro crecimiento económico como la mejor política social para revertir la pobreza; la pobreza es un problema de gran alcance en estos momentos, y requiere atención inmediata. Dentro de este contexto, parece acertado plantear la reversión de la pobreza como una meta ineludible de cualquier plan económico nacional, y no como el subproducto de una futura recuperación económica.

## BIBLIOGRAFIA

ALVAREZ HERRERA, Bernardo (1991) Política social, sistema político y democracia. Ponencia presentada en el *Primer Foro Sobre Política Social, Democracia y Desarrollo*, organizado por CESAP y FONDAP. Caracas.

BARRIG, Maruja (1989) "Women and Development in Perú: Old Models, New Actors". Ponencia presentada en la *Conferencia de AWID*, Washington (Association for Women in Development).

BENERIA, Lourdes (1991) "Structural Adjustment, the Labor Market and the Household: The Case of Mexico". en el libro editado por G. Standing y V. Tomkan: *Towards Social Adjustment*. International Labor Office.

\_\_\_\_\_ (1992) "The Mexican Debt Crisis: Restructuring the Economy and the Household". En el libro editado por L. Benería y S. Feldman: *Unequal Burden: Economic Crisis, Poverty and Women's Work*. Westview Press.

\_\_\_\_\_ (1993) *Contextualizing Women's Struggle for Livelihood: The Foreign Debt Crisis and the Social Cost of Adjustment*. Mimeo.

CAMACHO, Oscar O. y TARHAN, Ariana (1991) *Alquiler y propiedad en barrios de Caracas*. Editado por IDRC/UCV/CEU.

CARIOLA, Cecilia (1991) *Crisis y pobreza urbana: ¿Política social o compensación económica?*. *Cuadernos del CENDES*, N° 17/18.

\_\_\_\_\_ (1992) "Las estrategias económicas: el difícil camino de obtener los recursos para la supervivencia". En Cariola *et al. Sobrevivir en la pobreza: el fin de una ilusión*. CENDES, Editorial Nueva Sociedad.

CARIOLA, Cecilia; BETHENCOURT, Luisa; DARWICH, J. Gregorio; FERNANDEZ, Beatriz; GUTIERREZ, Ana Teresa; LACABANA, Miguel (1992) *Sobrevivir en la pobreza: el fin de una ilusión*. CENDES, Editorial Nueva Sociedad.

CARTAYA y D'Elia (1991) *Pobreza en Venezuela: realidad y políticas*. Editorial CESAP-CISOR, Caracas.

CORNIA, Giovanni Andrea; JOLLY, Richard; STEWART, Frances (1988) *Adjustment with a Human Face*. Clarendon Press, Oxford.

ELSON, Diane (1992) "Male bias in Macroeconomics: The Case of Structural Adjustment", en el libro editado por Diane Elson. *The Development Process*. Manchester University Press, Manchester y Nueva York.

FELDMAN, Shelley (1992) "Prologue". En el libro editado por L. Benería y S. Feldman: *Unequal Burden: Economic Crisis, Poverty and Women's Work*. Westview Press.

FIERRO DE ASCANIO, Josefina; FRIAS DE ORANTES, María Rosa; REGAGNO-PUENTE, Ileana (1993) "Venezuela". En el libro editado por Cochran Moncrieff: *International Handbook of Child Care Policies and Programs*. Greenwood Press.

FISHER, Bernardo (1991) "Roadworks Ahead". *Business Venezuela*. Julio/agosto 1991.

GARCIA, Alvaro; INFANTE, Ricardo; TOKMAN, Víctor (1989) "Paying off the Social Debt in Latin America". *International Labor Review*. Vol. 128, N° 4.

GEORGE, Susan (1988) *A Fate Worse than Debt*. Grove Press, NY.

GONZALEZ DE LA ROCHA, Mercedes (1991) "Family Well-Being, Food Consumption, and Survival Strategies During Mexico's Economic Crisis". En el libro editado por M. González de la Rocha y A. Escobar Lapati: *Social Responses to Mexico's Economic Crisis of the 1980's*. Center for US Mexican Studies, University of California, San Diego.

GUTIERREZ, Ana Teresa (1992) "¿Vivir para comer? El consumo de los sectores populares urbanos". En Cariola *et al. Sobrevivir en la pobreza: el fin de una ilusión*. CENDES, Editorial Nueva Sociedad.

HAKKERT, Ralph; GOZA, Franklin W. (1989) "The Demographic Consequences of Austerity in Latin America". En el libro editado por W. Canak: *Lost Promises: Debt, Austerity and Development in Latin America*. Westview Press.

KIEPER, Rolf (1983) "The Conditioning of National Policy Making by International Law: The Stand-By Agreements of the International Monetary Fund". *International Journal of the Sociology of Law*. Vol. 11.

LIND, Amy C. (1990) *Economic Crisis, Women's Work and the Reproduction of Gender Ideology: Popular Women's Organizations in Quito, Ecuador*. Tesis de Maestría presentada al Departamento de Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Cornell, Nueva York.

MARSHAL, Wolfe (1989) "The Prospect for Equity". *CEPAL Review*. Vol. 5.

PEREZ HERNANDEZ, Carmen Alicia (1994) *Adjustment Program in Venezuela: Impact on Poor Urban Households in Caracas and Possible Strategies to Overcome It*. Tesis presentada en la Universidad de Cornell para optar al título de Master of Regional Planning. Ithaca, NY.

PSACHAROPOULOS, George (1990) "Poverty Alleviation in Latin America". *Finance and Development*. Marzo.

SINGH, Ajit (1992) *The Lost Decade: The Economic Crisis of the Third World in the 80's: How the North Caused the South Crisis*. Kellogg Paper faxed to Cornell University in 1992.

URQUIDI, V. (1991) "The prospects for Economic Transformation in Latin America". *LASA Forum*. Vol. XXII, N° 3.

WORLD BANK (1989) *Making Adjustment Work for the Poor: A Framework for Policy Reform in Africa*. Washington, D.C.